

1. Principio de dignidad humana desde su noción procesal. Ámbitos de mayor incidencia.

El reconocimiento del hombre como centro y finalidad de toda la actividad estatal, y la aceptación de la primacía de éste, en virtud de la condición de ser humano, es el sustrato que nutre el axioma de la dignidad humana¹. Sin embargo, esta noción de la supremacía del hombre –sin distinción alguna– sobre cualquier ente de su creación, no siempre ocurrió así²; el fundamento de tal concepción personalista sólo se vio reconocida a partir de la visión liberal humanista que consideraba a toda persona dotada de libertad y en tal sentido digna desde el plano ético-valorativo por su capacidad de autodeterminación, ante lo cual toda organización social del hombre –incluida el Estado– no debe asumir fines trascendentes y autónomos respecto de la persona que sigue constituyendo su fin inmediato³.

Sobre el contenido de la dignidad humana en la Constitución subyace una visión antropocéntrica de la dignidad, en ella se reconoce que el hombre es el fin superlativo de la organización estatal⁴, esta ideología desarrollada con más vigor en la cultura occidental también ha sido reconocida en los diferentes instrumentos internacionales, inclusive aquellos que tienen un carácter decisivamente fundacional⁵ en ellos se destaca el carácter preeminente del ser humano en la organización social, y en el marco de las regulaciones jurídicas, en este caso del proceso penal, la supremacía de la dignidad del ser humano debe ser reconocida en la aplicación de normativa procesal, teniendo en cuenta las diferentes consecuencias que se desarrollan a partir de la dignidad humana. .

En cuanto al reconocimiento constitucional del principio aludido la Sala de lo Constitucional tiene reconocida la primacía de la dignidad humana, como principio

¹ (...)

² Ver el erudito panorama histórico-político que presenta LLOBET RODRÍGUEZ Javier en “Derecho Procesal Penal. II. Garantías Procesales. Primera parte. Editorial Jurídica Continental. San José. Costa Rica. 2005 pp 16 a 57

³ Ver en tal sentido los fundamentos que señalan para el principio de dignidad humana en TINETTI José Albino, BERTRAND GALINDO Francisco, KURI DE MENDOZA Silvia Lizette y ORELLANA María Elena “Manual de Derecho Constitucional” Tomo II. Centro de Investigación y Capacitación. Proyecto de Reforma Judicial. 1º edición. San Salvador. El Salvador. 1992 p. 667.

⁴ Así lo informan –Tinetti y otros– reconociendo a la dignidad humana como principio fundamental al indicar: “El Artículo 1 de nuestra Constitución se abre con la declaración de que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado...” la cual viene a reafirmar el postulado del preámbulo de que la convivencia nacional se debe establecer con base en el respeto a la dignidad de la persona humana”. TINETTI José Albino y otros “Manual de Derecho Constitucional...” Op. cit. p. 667.

⁵ Así por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice en su preámbulo: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

fundamentador del Estado y como limite para el ejercicio de la actividad estatal, en cuanto a partir de tal dignidad se le reconocen al ser humano todo un bagaje de derechos fundamentales y garantías para los mismos, que son los que rigen la función de las actuaciones públicas en cuanto prohibición para evitar los excesos del poder⁶. De ahí que en esa línea jurisprudencial dicho tribunal reafirme que la constitución salvadoreña se erige sobre una visión personalista y humanista⁷, la cual mediante la vigencia de los principios constitucionales, sirve como limitante a los excesos que puedan desarrollarse en el plano normativo.

La dignidad humana como principio tiene muchas áreas de manifestaciones, aquí nos ocuparemos de su significación procesal, es decir de las relaciones entre la exigencia a respetar la dignidad de todo hombre o mujer y la aplicación de la ley procesal penal. Debe recordarse que el proceso penal es el instrumento que se utiliza para el esclarecimiento de los hechos delictivos y de las personas responsables del mismo, como tal, es un instrumento de alta coercibilidad, lo cual supone la afectación de los derechos fundamentales del ser humano, mediante actuaciones

⁶ La Sala de lo Constitucional al centrar la actividad del Estado sobre la primacía de la dignidad humana dijo: “Ello significa que la Constitución no es la mera codificación de la estructura política superior del Estado Salvadoreño; sino que, si bien define esa estructura, lo hace a partir de un determinado supuesto y con un determinado contenido. Ese supuesto radica en la soberanía popular o poder constituyente del pueblo –Art. 83 Cn.– y su contenido está integrado esencial y básicamente por el reconocimiento de la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado –Art. 1Cn.– lo que conlleva a la búsqueda por la efectiva y real vigencia de los derechos fundamentales de la persona”. Sentencia de Inconstitucionalidad de los Artículos 2 inciso 2º y 4º, 4, 6, 12, 14 inciso 1º, 15 y 22 de la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado” Op. cit. p p. 72.

⁷ En este punto se dijo: “Es necesario además hacer referencia a la relación de la política criminal con los principios constitucionales; a tal fin, podemos considerar que las premisas esenciales determinadas por la constitución para el comportamiento estatal en general, y sus concretas manifestaciones en el ámbito penal son: .. B. En segundo lugar el respeto de la dignidad de la persona humana, que es, a decir del Preámbulo de la Constitución, uno de los “fundamentos de la convivencia nacional”; y a los derechos fundamentales inherentes a ella, sobre todo por que nuestra Constitución se basa en una concepción personalista o humanista que –según expone Legaz Lacambra– en su esencia “significa dos cosas: una, que el Derecho es obra del hombre; otra, que el Derecho está al servicio del hombre”. Tal respeto no debe limitarse a una consideración formal o retórica, sino que debe traducirse en una efectiva tutela a los derechos fundamentales de la persona humana”. Sentencia de Inconstitucionalidad de los Artículos 2 inciso 2º y 4º, 4, 6, 12, 14 inciso 1º, 15 y 22 de la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado” Op. cit. p 94. Un precedente importante, sobre la visión de que la persona humana es el centro de toda la actividad estatal, puede confrontarse en Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley del IVA... Op cit. pp. 77 a 79. Por precedente más reciente el supremo tribunal ha reiterado el decantamiento de la Constitución por una visión humanista y personalista ciñéndolo al caso de la normativa secundaria preconstitucional así se dijo: “Para abordar el análisis y resolución de dicho problema, debe tenerse presente que la actual Constitución se construye sobre un sustrato ideológico personalista o humanista, distinto al de las Leyes Primarias bajo las cuales se promulgaron las disposiciones preconstitucionales...”. Sentencia de Inconstitucionalidad de los procesos 4-88; 1-96 acumulados sobre el Decreto-Ley N° 296 emitido por la junta Revolucionaria de Gobierno. Pronunciada por la Sala de lo Constitucional el veinte de junio de mil novecientos noventa y nueve. (referencia :IS00488.99ac. IS00196.99) en Corte Suprema de Justicia. Revista de Derecho Constitucional. N° 31 Tomo I Abril-Junio. 1999. San Salvador. El Salvador. 1999, p. 151.

en el ejercicio del poder a través de los actos procesales que realizan los diferentes operadores del sistema penal (policías, fiscales, jueces, etcétera); en esta actividad precisamente es donde debe reconocerse la vigencia del principio de dignidad humana de cara a la restricción de dichos derechos.

No pretendemos ocuparnos de todos, únicamente destacaremos aquellas áreas en las cuales el respecto a la dignidad humana puede verse más comprometida:

a) La duración del proceso. Si el procedimiento es un mecanismo retractor –en mayor o menor medida– de los derechos de las personas, la duración del mismo se conecta con la vigencia de la dignidad humana, por cuanto la resolución de los conflictos humanos que afectan tanto a víctima como a imputados no podrían estar estructurados sobre procedimientos extremadamente duraderos, las personas tienen derecho a que la limitación, el reconocimiento o la redefinición de sus derechos, no se extiendan en demasía⁸. De ahí que la regulación del plazo de privación de libertad reglado en el artículo 8 CPP responda a un nivel de razonabilidad, como también la duración de una investigación, artículo 17 inciso tercero CPP o el plazo de la instrucción artículos 309 y 310 inciso segundo CPP.

b) El derecho a ser tratado como inocente. En esta particular situación, se ha reconocido que la persona es inocente hasta que en juicio público no se declare su culpabilidad, por ende el ser humano no puede ser tratado como culpable, su tratamiento en el proceso penal se debe corresponder con el status que ostenta, es decir, de una persona hasta ese momento inocente; lo anterior tiene una inusitada relevancia en el dictado de la prisión preventiva, por cuanto ésta no puede estar fundada sólo por razón de la imputación, deben concurrir otros presupuestos que justifiquen la adopción de un mecanismo tan gravoso; pero además el tratamiento que se va a derivar del estatus de privado de libertad respecto de la detención provisional, no puede ser equiparado en ningún caso al régimen penal de los condenados, la privación de libertad de una persona sometida a proceso penal, debe ser sustancialmente diferencial al régimen de internamiento de los condenados.

c) Mayor connotación tiene el principio de dignidad humana respecto de la averiguación de los hechos y de la verdad en el proceso penal, es el rango de digno de una persona la que sirve de límite a la búsqueda de la verdad procesal, ello implica reconocer que no se puede alcanzar la verdad por cualquier medio, y en la indagación y obtención de la misma, no pueden

⁸ En este punto conviene dejar citada como referente la sentencia de Habeas Corpus del veintidós de marzo de 2000 HC 49-2000 Considerando IV.

vulnerarse esencialmente, el núcleo duro del derecho fundamental objeto de restricción, o realizarse un acto que afecte irremisiblemente la autonomía del ser humano, o efectuar actos que sean contrarios a su dignidad, como actuaciones que comporten tratamientos, crueles, tormentosos o degradantes.

Es por ello que el principio establece el derecho de los intervinientes materiales del proceso penal –víctima e imputado– a ser tratado con respeto a su dignidad, y ello se vincula con mayor énfasis al respeto de la autonomía personal, de la integridad física y de la integridad moral. Claro ejemplo de ello, son las limitaciones a los actos de prueba que comporten una inspección o intervención corporal, y en este punto medular el tratamiento es diferencial entre víctima e imputado, mientras éste puede ser coaccionado a soportar la limitación de sus derechos siempre teniendo en cuenta la proporcionalidad, aquélla no puede ser objeto de coerción, ni aún bajo decisión judicial⁹, por cuanto una de las consecuencias del principio de dignidad determina que el ser humano no puede ser objetivizado, y la víctima mucho menos puede ser reducida a la condición de mero objeto en el procedimiento penal¹⁰.

⁹ Sobre los aspectos que configuran una legítima limitación de los derechos fundamentales del imputado, del cual puede partirse para considerar los graves reparos que se tendría para obligar a la víctima contra su voluntad a soportar una intervención corporal. Ver IGLESIAS CANLE Inés C. LIZAMA Samuel Aliven “Intervenciones Corporales y Prueba Científica”. Consejo Nacional de la Judicatura. Escuela de Capacitación Judicial. San Salvador. El Salvador. 2006 p 27 y ss.

¹⁰ En este aspecto la regulación del artículo 200 inciso segundo CPP (fue una observación al Decreto Legislativo original) es crítica por cuanto las víctimas no podrían ser constreñidas a prestar colaboración, lo cual significa que contra su voluntad no pueden realizarse actos de intervención corporal, pues la posición de la víctima es distinta a la del imputado.